

X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario, 2005.

Reflexiones en torno a la "transición a la democracia" en Argentina. Elementos para una comparación con la transición chilena.

Alicia Rojo.

Cita:

Alicia Rojo (2005). *Reflexiones en torno a la "transición a la democracia" en Argentina. Elementos para una comparación con la transición chilena. X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional del Rosario. Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Litoral, Rosario.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-006/117>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Xº JORNADAS INTERESCUELAS / DEPARTAMENTOS DE HISTORIA

Rosario, 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2005

Título: "Reflexiones en torno a la "transición a la democracia" en Argentina.

Elementos para una comparación con la transición chilena."

Mesa temática: "América Latina y la crisis actual: una realidad y un debate"

Autora: Alicia Rojo

Pertenencia Institucional: docente Facultad de Filosofía y Letras – Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos Aires

Dirección: Av. Caseros 2385. Capital Federal

Teléfono: 4305-6600

Correo electrónico: asrojo@ciudad.com.ar

Ponencia

Para pensar el problema del carácter de las transiciones a la democracia en América Latina en los años 80 es necesario considerar la relación de nuestros países con el imperialismo en la etapa.

Los años 80 se caracterizaron por los esfuerzos de Estados Unidos, fundamentalmente, por superar la crisis económica y de hegemonía¹ iniciada a fines de la década del 60 y que hace eclosión a mediados de los 70. Los ascensos obreros y populares que se dieron en varios países centrales y de la periferia, fueron parte fundamental de la crisis de hegemonía que sufrió el imperialismo dominante. La derrota o desvío de estos procesos revolucionarios ocuparon un lugar central en la política imperialista para poner las bases para la recuperación de la crisis.

La debilidad que la derrota de la guerra de Vietnam implicó para el imperialismo², lo impulsó a utilizar mecanismos democráticos como táctica defensiva para enfrentar los cuestionamientos de su hegemonía y desviar los procesos revolucionarios abiertos en los países centrales, tal el caso de la revolución portuguesa³.

Los gobiernos militares argentino y chileno fueron, por otro lado, dos de los casos más claros de derrotas de procesos revolucionarios a través de dictaduras militares y represión abierta contra la vanguardia revolucionaria y la clase trabajadora y sectores populares.

¹ El aumento de la competencia interimperialista, el cuestionamiento a la hegemonía norteamericana, cuya expresión más notable fue la guerra de Vietnam, y el descenso de la tasa de ganancia capitalista, comenzaron a mostrarse en la segunda mitad de la década del 60, y la crisis se generaliza a mediados de la década del 70.

² Entre otros elementos, los efectos del "síndrome de Vietnam" serán centrales a la hora de definir esta política.

³ "El aborto de la revolución portuguesa se transformó en un triunfo del imperialismo que permitió inclinar a su favor la relación de fuerzas en Europa con consecuencias de alcance internacional. Las lecciones sacadas de este triunfo imperialista, influyeron decididamente en el éxito de la aplicación de esta misma política de contrarrevolución democrática frente al ascenso revolucionario en España luego de la muerte de Franco en 1975 bajo el influjo de Portugal. El estrangulamiento de estos procesos, aunque no terminaron de cerrar la etapa de ascenso abierta en 1968, como luego demostraría el triunfo de la revolución sandinista y la revolución iraní en 1979, permitieron liquidar el desarrollo de la revolución proletaria en los países centrales." Estrategia Internacional N° 16

Durante la presidencia de Carter, éste utilizó la bandera de los "derechos humanos" y de la "democracia" en su agenda de política exterior, como forma de recomponer consenso interna y externamente en el marco general de la recomposición de su hegemonía y de los efectos actuantes del "síndrome de Vietnam".

Bajo el gobierno de Reagan esta política fue una cobertura de la contraofensiva política, económica y en algunos casos hasta militar contra las masas de los países centrales y la periferia. Este cambio en la política imperialista es reflejado por Henry Kissinger, en su libro "La diplomacia": "Carter hizo de los derechos humanos el fundamento de su política exterior, y los promovió tan intensamente, entre los aliados de los Estados Unidos, que su llamado a la rectitud ocasionalmente amenazó su cohesión interna. Reagan y sus asesores dieron un paso más allá, tratando a los derechos humanos como arma para derrocar al comunismo y democratizar a la Unión Soviética y, por tanto, como clave para un mundo pacífico...". El carácter global de esta política implica, según Kissinger que: "Los Estados Unidos no aguardarían pasivamente a que evolucionaran las instituciones libres, ni se limitarían a resistir a las amenazas directas a su seguridad. En cambio, promoverían activamente la democracia, recompensando a aquellos países que cumplieran con sus ideales, y castigando a los que no cumplieran (aún si no presentaban un desafío o una amenaza para los Estados Unidos). De este modo, el equipo de Reagan puso de cabeza las pretensiones de los primeros bolcheviques: los valores democráticos, no los del Manifiesto Comunista, serían la ola del futuro. Y el equipo de Reagan fue congruente: hizo presión sobre el régimen de Pinochet en Chile y sobre el régimen autoritario de Marcos en Filipinas a favor de una reforma; el primero fue obligado a aceptar un referéndum y unas elecciones libres, en las que fue reemplazado; el segundo fue derrocado con ayuda de los Estados Unidos".

Aclaremos que la utilización ofensiva de las banderas de la "democracia" por parte del imperialismo norteamericano se combinó con guerras de baja intensidad y derrotas como la de Argentina en la guerra de Malvinas a manos del imperialismo anglosajón.

Así, entonces, esta política que iniciada a mediados de los años 70, aplicada en casos como el de Portugal, España y Grecia, se fue extendiendo en los 80, hacia algunos países semicoloniales y estados obreros, se fue transformando cada vez más en una de las formas privilegiadas de la política imperialista en el periodo.⁴

En este marco es posible ubicar las "transiciones a la democracia" en América Latina, particularmente en el Cono Sur, desde el caso menos controlado en Argentina en 1983 hasta el más continuista en Chile en 1989.

Finalmente, el llamado Reaganismo-tatcherismo, siendo la política imperialista más global para salir de la crisis, tras el objetivo de recuperar la tasa de ganancia capitalista, implicaba un ataque al proletariado de los países centrales para aumentar la productividad del trabajo, por un lado, y por otro, descargar la crisis sobre los países de la periferia a través de múltiples mecanismos. Esta política se desplegó abiertamente en los 90 y sus tareas fueron llevadas adelante en Latinoamérica por gobiernos democráticos asentados durante o después de las "transiciones democráticas".

Podemos decir entonces, que derrotadas las vanguardias revolucionarias y puestas las bases para el disciplinamiento de la clase obrera y los sectores populares, se abrió el camino de las "transiciones democráticas". Estas "transiciones democráticas" se asentaron sobre las derrotas previas de los procesos revolucionarios de los 70, y de las crisis revolucionarias que se abrieron al fin de las

⁴ "A estas diversas manifestaciones de su aplicación la denominaremos 'contrarrevolución democrática'. Idem.

dictaduras militares. En este sentido es posible definir las como "transiciones post-contrarrevolucionarias".

La dictadura militar

En la Argentina, en 1969 el Cordobazo y los Rosarios abrieron el camino de una creciente radicalización de sectores de la juventud y de combativos procesos de lucha y de organización de la clase obrera. Así vimos el clasismo cordobés, las huelgas largas con toma de rehenes, los procesos de lucha de Villa Constitución, los coordinadores interfabriles en el Gran Buenos Aires y las huelgas de 1975 contra el Rodrigazo. Este ascenso en todas sus expresiones cuestionó profundamente la dominación de clase de la burguesía.

El golpe de 1976, en el marco más amplio de la política imperialista definida más arriba, frenó el ascenso revolucionario y abrió el camino para imponer los planes económicos del gran capital. Esto implicaba el disciplinamiento de los trabajadores y sectores populares. Digamos por ejemplo que hasta 1983 hay una "expulsión sistemática e ininterrumpida de trabajadores". Esto hizo posible también un aumento de la productividad de la mano de obra lo que responde a una mayor intensidad en el uso de la fuerza de trabajo y la prolongación de la jornada de trabajo. Esto como consecuencia de la política de "disciplinamiento" general, con la eliminación de conquistas laborales y no de la introducción de tecnología, en el marco de una "escasa canalización de capitales hacia las actividades industriales". Por último, una característica central de la política económica de la dictadura fue la distribución regresiva del ingreso. En el marco de la reducción de la producción industrial fue evidente la "tendencia al aumento de la participación del estrato más concentrado", proceso que se profundizó tras la crisis de 1981 ⁵.

Estos aspectos están indisolublemente unidos al de la represión. El blanco principal del ataque fue la clase obrera y la vanguardia obrera y popular, protagonista del ascenso previo y el principal obstáculo para la aplicación de los planes imperialistas y del gran capital⁶.

El golpe se proponía en definitiva la preservación del Estado y la dominación de la burguesía contra la movilización revolucionaria de las masas. Por esto todas las instituciones de la burguesía abren el camino al golpe y sostuvieron al régimen.⁷

Miles de delegados de fábrica, activistas, militantes políticos, fueron asesinados a manos de la dictadura militar en medio del silencio cómplice de los dirigentes sindicales, políticos y religiosos. Silencio y complicidad que respondía al compromiso de los partidos patronales, la Iglesia y las organizaciones sindicales con el sostenimiento del estado burgués y la dominación de la burguesía que las acciones del movimiento de masas cuestionaban profundamente.

⁵Datos de Aspiazu, Basualdo, Khavisse, El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80. Edit. Legasa, 1986.

⁶ Según el informe de la CONADEP los porcentajes de víctimas de la represión que continúan desaparecidas o que fueron liberadas después de pasar por centros clandestinos de represión son los siguientes: obreros 30,2%, estudiantes 21%, empleados 17,9%, profesionales 10,7%, docentes 5,7%, autónomos y varios 5%. Siguen amas de casa, conscriptos y personal subalterno de fuerzas de seguridad, periodistas, actores, artistas y religiosos. Es decir, más de la mitad de los afectados por la represión eran trabajadores: entre obreros, empleados y docentes: 54% y casi un 30% entre estudiantes y profesionales. Como todos los autores destacan, tal represión se da en el marco de un plan perfectamente diseñado.

⁷En relación a los partidos patronales su participación en el gobierno militar está ampliamente registrada. Sobre la extensión total del territorio nacional sobre los 1.697 municipios censados sólo 170 intendentes, o sea el 10% pertenecen a las Fuerzas Armadas, 645 intendentes, o sea el 38% carecen de militancia política definida, y 878 intendentes, esto es, el 52% están de un modo u otro adscriptos a una corriente política concreta (La Nación, 25 de marzo de 1979).

La resistencia contra el régimen vendría de la clase obrera y los sectores populares. La clase obrera, siendo el blanco central de la represión, viendo morir y desaparecer a los mejores elementos de su vanguardia, abandonada a su suerte por las direcciones sindicales, ofreció una tenaz resistencia, mientras surgían los organismos de derechos humanos que concentraron gran parte de la lucha aún silenciosa y altamente costosa, contra la dictadura.

El ascenso obrero y popular en Chile cuestionó mucho más profundamente las bases de dominación burguesa ya que las masas crearon organismos de poder.

La llegada al poder de Allende en Chile fue acompañada por la desmovilización de los 15 mil comités de base de la Unidad Popular, que con su acción defendieron en 1970 la victoria electoral de Allende. No haremos aquí un análisis de la política del gobierno de Allende y la Unidad popular, digamos que fueron los propios trabajadores quienes se movilizaron para imponer las conquistas que esperaban del gobierno de la Unidad Popular. Se produjeron experiencias embrionarias de poder dual (con los cordones industriales y las organizaciones populares en las poblaciones) que comenzaron a imponer el control y la organización de la producción y el abastecimiento del país.

El ascenso obrero y popular en pleno gobierno de Allende, aterrorizó a la burguesía y al imperialismo norteamericano, que recurrieron a las Fuerzas Armadas con el objetivo de detenerlo. El golpe del 11 de septiembre de 1973 instauró una sangrienta dictadura militar que dejó un saldo de unos miles de trabajadores asesinados, miles de exiliados y cárceles llenas de obreros, campesinos pobres, estudiantes e intelectuales.

En el poder, la dictadura chilena devuelve la explotación de la minería del cobre y de otros minerales a sus antiguos propietarios extranjeros. En 1974 promulga el estatuto del Inversionista Extranjero que el inicio de la transformación en la estructura de propiedad en Chile a favor del capital extranjero.

Si en la mayoría de los países de América Latina la ola privatizadora se produjo en la década del 90, al momento del golpe de estado existían 600 empresas estatales, a fines de 1989 éstas alcanzan las 50. Desde el punto de vista político, la dictadura impone una nueva Constitución en 1980, que se oficializa mediante un plebiscito. Esta genera un marco institucional que permite entre otras cosas, avanzar en la explotación del trabajo con el Nuevo Plan Laboral.

Así esta política significó el derrumbe de todas las conquistas sociales alcanzadas por los trabajadores, sumado a la proscripción de la Central Única de Trabajadores y de las organizaciones sociales, tales como las juntas de vecinos, estudiantes y mujeres.

La caída de la dictadura

Como planteamos más arriba el imperialismo modifica su política hacia los regímenes militares buscando salidas democráticas que recompusieran las bases sociales y permitieran recuperar el consenso perdido.

En Argentina, desde 1980 la crisis surgió por todos los poros de la dictadura militar: se profundizaron las tensiones intramilitares, la crisis económica evidenciada en el aumento de la deuda externa, en la recesión y en el aumento de la inflación, dejó al régimen sin el apoyo de amplios sectores -sobre todo entre las clases medias y parte de la burguesía-, y en este marco, el aumento de la movilización obrera y popular.

La pérdida de base social del régimen militar se expresó en una mayor receptividad en la sociedad frente al problema de derechos humanos y finalmente en una participación activa. Estas movilizaciones se transformaron en verdaderas luchas por la vigencia de las libertades democráticas, abandonando su carácter defensivo.

Mientras tanto la clase obrera se recupera del golpe de la represión y se generalizan las luchas. Cada vez más éstas asumen los reclamos democráticos. Es el momento de "se va a acabar la dictadura militar", de las huelgas generales y las manifestaciones con enfrentamientos con la policía. A comienzos de la década del 80 se generaliza la resistencia y la movilización obrera contra la dictadura militar.

Ya en 1979 se produce la jornada Nacional de Protesta del 27 de abril frente a los conflictos obreros que tenían lugar por la base y en 1980 se desarrollan varios conflictos incluso con tomas de fábrica. En 1981 las luchas se extienden. El 7 de noviembre la marcha por "Paz, Pan y trabajo" a San Cayetano, fue organizada por la CGT y apoyada por algunos partidos políticos, reunió más de 50.000 personas. Más allá de las consignas convocantes los manifestantes comienzan a gritar: "se va a acabar la dictadura militar", "que aparezcan los que no están", "asesinos", "libertad". La infantería carga contra los manifestantes y éstos responden. Se llamó justamente la "marcha de la bronca". Manifestaciones similares se producen en otros puntos del país.

Frente al aumento de las movilizaciones y a la profundización de la crisis los partidos unifican sus fuerzas para sostener al régimen. Así como frente al ascenso revolucionario de los 70 el conjunto de las fuerzas políticas y la burocracia sindical avalan el golpe militar, ahora frente a la crisis crean la Multipartidaria, que bajo el ropaje de "preparar la vuelta a la vigencia de la Constitución", buscaba canalizar la movilización a través de las organizaciones políticas de la burguesía. La Multipartidaria quedó integrada por el PJ, UCR, MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Intransigente y se profundizó el diálogo entre los partidos políticos patronales y el gobierno.

La dictadura perdía base social, la crisis social y económica encontró su correlato en la inestabilidad del régimen político. La Junta militar encabezada por Galtieri intentó una salida: la ocupación de las Islas Malvinas, como reclamo histórico del pueblo argentino, podría galvanizar las fuerzas sociales y darle al régimen la base de apoyo que le faltaba. Efectivamente la ocupación de las islas despertó un gran entusiasmo popular y la movilización tomó un carácter antimperialista. Pero la derrota en la guerra aceleró y profundizó la crisis del régimen militar. Por un lado, profundizó las divisiones en las propias Fuerzas Armadas. Por otro, acentuó su desprestigio y aumentó el odio entre las masas que a la crisis económica y la represión agregaba la derrota en la guerra.

Ante este panorama, los partidos políticos y la burocracia sindical (ésta última especialmente a través de dirigentes prestigiados como Ubaldini, dentro de un marco general de profundo desprestigio) nuevamente cumplirán con su rol de sostenedores del régimen. En este caso lo cumplieron llamando a la paz y a la unidad nacional y a la conformación de un gobierno de transición. El conjunto de los partidos que formaban la Multipartidaria hace un llamado también a la unidad nacional.

Sin embargo, la crisis de la dictadura militar se volvió irreversible. El régimen no pudo superar la crisis en que la sumergió el descalabro económico y la movilización obrera y popular antes y durante la guerra de Malvinas.

Es importante definir qué factor resulta determinante en la caída de la dictadura. Desde ya que la derrota en la guerra aceleró la crisis de la dictadura. Pero fue la movilización que el régimen enfrentaba desde 1981 agudizada por la guerra de Malvinas y profundizada a partir del odio que la rendición en la

guerra despertó en las masas, la que planteó la posibilidad de la caída revolucionaria de la dictadura. No a otra cosa responde la política de sostenimiento del régimen y los esfuerzos hacia una transición ordenada que desarrolla la burguesía. Fue esta movilización por tanto el factor determinante en la crisis de la dictadura y definirá las prioridades del gobierno democrático. Esta definición resulta fundamental para analizar la política del régimen democrático ya que su objetivo central será doble: canalizar la movilización popular hacia las instituciones democráticas y recomponer el aparato de represión del Estado.

Así como también es necesario tener en cuenta qué elementos facilitaron que la crisis revolucionaria abierta pudiera ser rápidamente cerrada y asentarse la política de "contrarrevolución democrática". Retomaremos este punto más adelante.

A partir de 1976 en medio del terror en Chile, comienza un lento proceso de resistencia; hasta ese momento, uno de los pocos grupos que la impulsan son las familias las víctimas directas de la represión, formándose las primeras agrupaciones de familiares. Después, producto del hambre se forman las primeras "ollas comunes". Desde 1983 el movimiento obrero comienza a recuperarse, se producen junto con las "marchas del hambre", las primeras protestas nacionales con "cacerolazos" en todo el país y huelgas, hasta 1986.

Comenzaron entonces las primeras negociaciones para salir de la dictadura hacia una transición por los partidos como forma de evitar una caída de la dictadura producto de la movilización popular, derrotando así este proceso de resistencia y movilización. Esta derrota se impuso poco antes del plebiscito de 1989, donde se plebiscitaba la continuidad del gobierno militar. El "no" tuvo un rotundo éxito a pesar del fraude electoral, y la salida pactada a la democracia quedó así sellada. El recambio de gobierno fue liderado por la coalición de los partidos de la Concertación.

La "transición a la democracia"

El gobierno radical tenía dos grandes objetivos relacionados entre sí: resolver la crisis del Estado expresada en la crisis de su pilar fundamental, las Fuerzas Armadas, y culminar la aplicación de los planes económicos que la crisis de la dictadura había dejado inconclusos. Lo primero implicaba recomponer la unidad en las filas de las Fuerzas Armadas, por un lado y, "reconciliarlas" con la sociedad, es decir, crear una base social de apoyo en caso de necesitar usarlas contra las masas. Los planes económicos del gobierno radical mantuvieron esencialmente los objetivos del gobierno militar buscando una reestructuración del país a través de una profundización de sus lazos con el imperialismo.

"La política macroeconómica argentina durante la década "democrática" ha representado una continuidad de objetivos con los desastrosos experimentos monetaristas de la dictadura militar del PRN. Así la década se caracterizó por la desindustrialización global, la desinversión y la fuga de capitales al exterior... Entre 1980 y 1990, el pueblo argentino pagó 12 mil millones de dólares sólo en intereses de la deuda externa, la cual aumentó de todas maneras 22 mil millones. Esta sangría fue financiada por el conjunto de la población a través del Estado nacional con su política inflacionaria... En 1990, de la población argentina 20% concentraba 69% de la riqueza nacional, mientras que 17% percibía sólo 2%. Asimismo, 77% del ingreso nacional estaba en manos de sectores empresariales,

mientras que 23% correspondía a los ingresos de los asalariados⁸. Por lo tanto las consecuencias sociales de los planes económicos de la dictadura se profundizarán en la etapa "democrática", en la que se produce un salto en la explotación de la clase obrera y en el empobrecimiento de las masas; así también se desarrollaron una serie de luchas fundamentalmente en el proletariado industrial y en el sector público.

La política de recomposición de las Fuerzas Armadas requería también de una política hacia los derechos humanos. Frente a la presión de las masas el gobierno radical se propuso, por un lado, preservar a las Fuerzas Armadas como institución fundamental de represión del Estado, sancionando por violación a los derechos humanos sólo a algunos de sus miembros y estableciendo la necesidad de diferenciar niveles de responsabilidad. Esta política empezaría a plasmarse en la decisión de enjuiciar a los comandantes de las fuerzas. Esto se da en el marco de una política de "autodepuración", es decir, que fueran las propias fuerzas las que sancionaran a algunos de sus miembros y cerrar así el problema militar.

Esta política se vio acompañada de una profusa propaganda. Nadie podía negar la existencia del genocidio, el objetivo de las instituciones fue entonces negar el carácter de la lucha obrera y popular en los 70 y el carácter de clase del genocidio. Uno de los mecanismos fue la difusión de la llamada "teoría de los dos demonios". El objetivo era condenar la violencia en general instaurando la concepción de que "la violencia engendra violencia", es decir una propaganda "pacifista" que encontró en las masas un terreno fértil tras la derrota de Malvinas. Así también se difundió la idea de que el genocidio no fue obra de las FFAA en su conjunto, que sólo algunos de sus miembros fueron responsables; la idea de "excesos" en el marco de la guerra librada, fue ganando espacio. Al mismo tiempo la propaganda buscaba desarrollar una ideología "democratista": "Con la democracia se come, se cura, se educa", en palabras de Alfonsín, tenía el objetivo de borrar de la memoria de las masas la necesidad de un cambio revolucionario que estuvo tan presente en los 70, y profundizar la confianza en las instituciones democráticas para facilitar el avance de la política del régimen.

Los juicios a las juntas militares debían ser llevados a cabo en principio por el Consejo Supremo de las FFAA. Esta política de "autodepuración" se completó con la decisión de mantener a los jueces militares establecidos desde la dictadura. No resulta extraño por lo tanto que el Consejo Supremo expresara que las órdenes dadas por las cúpulas militares para la represión eran "inobjetablemente legítimas". Así, la Cámara Federal de Buenos Aires debió hacerse cargo del enjuiciamiento. Para esta instancia el gobierno había tomado también sus medidas: nombró en todos los cargos judiciales de la Cámara Federal y en la fiscalía de la cámara, a funcionarios judiciales que lo habían sido durante la dictadura militar.

Si bien los juicios no respondieron a la política diseñada en principio por el gobierno, y mucho menos a la del conjunto de las FFAA que seguirán reclamando por la total impunidad, sí fueron parte de la política del régimen de canalizar la movilización desatada por las demandas de "juicio y castigo a los culpables del genocidio" hacia los carriles institucionales evitando toda forma de investigación independiente y juicios populares, esto significaba despojar a las demandas de todo contenido revolucionario que enfrentara la política del régimen, en el marco de salvaguardar a las FFAA como

⁸ Pozzi, Schneider, "Combatiendo al capital", crisis y recomposición de la clase obrera argentina (1983-1993), El Bloque Editorial, 1994, pág 33-34.

institución enjuiciando sólo a sus máximos integrantes, buscando restaurar las profundas divisiones en su seno en función de la política de "recomposición" de las FFAA como aparato de represión.

A fines de 1986 se dictó la ley de Punto Final. Esta ley fijaba una fecha límite de 60 días después de la cual se extinguía la posibilidad de llevar acciones penales en causas aún no iniciadas⁹. La ley de Punto Final avanzaba en la política del régimen: significaba la exclusión de aquellos que aún no habían sido enjuiciados de toda posibilidad de serlo, estaban siendo perdonados por sus crímenes cientos de asesinos y torturadores.

Decenas de miles se movilizaron contra el Punto final pero esta movilización fracasó en impedirlo. En abril de 1987 se produjo el levantamiento militar "carapintada". Su demanda era una "solución política" para el tema de los juicios, es decir, exigían una amnistía y pedían que terminara la "campaña de desprestigio llevada a cabo por los medios de comunicación", es decir, imponer su reivindicación de las acciones represivas durante la dictadura. Además exigían la renovación de la cúpula militar poniendo en evidencia la crisis interna que sufrían las FFAA desde la caída de la dictadura militar y aún no resuelta. El levantamiento, protagonizado por el coronel Aldo Rico, dio inicio a un nuevo avance del régimen en la política de impunidad al abrir el camino de la ley de obediencia debida.

La noticia de un posible golpe de estado generó una masiva movilización popular: miles se reunieron en Plaza de Mayo, miles en Campo de Mayo, en Córdoba, Tucumán, Salta y el resto del país, gritando "¡esto pasa por el punto final!" reclamaban justicia y castigo a los sediciosos y a sus cómplices del Proceso.¹⁰ Frente a la multitud en Plaza de Mayo el jueves de semana santa el presidente Alfonsín hacía un llamado a que todos los partidos se hicieran cargo de la situación y a la reconciliación nacional.

El llamado del presidente dio resultados, los partidos políticos (con excepción del Movimiento al Socialismo y el Partido Obrero y, dentro de los organismos, las Madres), la burocracia sindical, varios organismos de derechos humanos y organizaciones empresariales firmaron el Acta de compromiso democrático, el domingo de pascuas: "reiteran su ... decisión de apoyar con todas las acciones a su alcance la vigencia irrestricta de la Constitución... condenan todo intento de subvertir todos estos postulados... la reconciliación de los argentinos sólo será posible en el marco de la justicia, del pleno acatamiento de la ley y del debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado."

Con este acuerdo, los partidos y la burocracia comprometían al régimen de conjunto en el perdón a la inmensa mayoría de los torturadores y asesinos que significó la ley de obediencia debida. El 13 de mayo, el presidente envió al congreso el proyecto de ley que establecía finalmente que los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales, y personal de tropa de las FFAA de seguridad policiales y

⁹ El discurso de Alfonsín al elevar el proyecto de ley constituye un "resumen" de la política del régimen: "... (el país) precisa a las fuerzas armadas plenamente integradas a esta marcha, al Estado. ...no hay una Argentina para los civiles y otra para los militares, como tampoco hay una Argentina para los trabajadores y otra para los empresarios...Dije alguna vez que al querer combatir al demonio con las armas del demonio, la Argentina se convirtió en un infierno. El gobierno condenó la violencia: la del terrorismo y la de la represión ilegal. Además dejó muy en claro que la imputación de responsabilidad se hacía a los agentes estatales involucrados y no a las instituciones... hay dos situaciones que requieren urgentes correcciones... Existe de manera clara una dificultad creciente a consecuencia del largo tiempo transcurrido en las investigaciones, con el consiguiente retraso en la asignación de responsabilidades... se está afectando de modo directo tanto a las víctimas de la represión ilegal como a un número considerable del personal de las fuerzas armadas que experimenta dudas acerca de su eventual situación procesal."

¹⁰ Ubertalli, "Crónica de una semana poco santa", en El complot militar, op. cit.

penitenciarias no eran punibles por delitos que hayan violado los derechos humanos en tanto se presumía que obraron en virtud de obediencia debida.

Quedará en manos del gobierno peronista iniciado en 1989 completar la política de Alfonsín en relación con el problema de los Derechos Humanos a través de los indultos. Así como también el implementar la política neoliberal. Tras la derrota que implicó la hiperinflación en 1989 para las masas y su utilización para disciplinar también al conjunto de la burguesía al gran capital, se despejó el camino para aplicar en toda su magnitud los preceptos del “Consenso de Washington” abriendo la economía argentina al capital extranjero y avanzando tanto con la política de privatizaciones como con la reforma laboral.

No desarrollaremos aquí las características del gobierno memenista. Dejamos dicho que en sus manos quedó la implementación de la “ofensiva neoliberal” sobre la base de lo hecho por la dictadura militar, la recomposición del Estado llevada a cabo por el gobierno radical y los avances hechos por este gobierno en el terreno económico-social. Los límites del gobierno radical para implementar plenamente esta política devienen de las contradicciones de la caída de la dictadura, a las que nos referimos más arriba y a las que el gobierno debió dar respuesta definiendo las prioridades de la política del gobierno radical.

Distinto fue el caso de Chile. La dictadura chilena avanza en las políticas de apertura al capital extranjero, privatizaciones y reforma laboral, allanando el camino de los gobiernos democráticos que mantendrán lo “logrado” por la dictadura. No sólo en el terreno económico mantendrán los gobiernos democráticos las bases puestas por la dictadura: el andamiaje institucional provisto por la dictadura ha permanecido intacto desde la apertura democrática y ha sido la base del disciplinamiento de la clase trabajadora y sectores populares, y la estructura político-jurídica que sostuvo el ataque a sus conquistas y el sometimiento del país al imperialismo.

Como dijimos, el año 1988 marcó el comienzo de la restauración democrática en Chile y poco después el triunfo de la Concertación de Partidos por la Democracia. El nuevo régimen no cuestionó las profundas reformas socio-económicas establecidas por la dictadura, se continuó con una política de privatizaciones, y se mantuvo el Plan Laboral.

Por otro lado, se mantuvo el andamiaje institucional creado durante la dictadura. En la cúspide de la estructura estatal se encuentra el Consejo de Seguridad Nacional, la mitad de cuyos miembros son militares y donde el voto del jefe de Estado tiene igual peso que el del general director de Carabineros¹¹. El presidente chileno tiene prohibido nombrar, ascender y remover a los mandos militares y de la policía militarizada.

Como claro ejemplo de la continuidad entre dictadura y democracia en Chile, digamos que en 2003, Ricardo Lagos, reafirmaba la vigencia del decreto de autoamnistía de Pinochet de 1978. En Chile aún permanecen en prisión un importante número de detenidos políticos. Mientras se mantiene la ley de autoamnistía, ninguno de los los gobiernos democráticos ha decidido amnistiar a los presos políticos de la resistencia antidictatorial que paradójicamente han sido juzgados tomando en cuenta el andamiaje jurídico del pinochetismo.

¹¹ El artículo 3 de la Constitución elaborada por la dictadura en 1980, hoy vigente, designa como miembros del Consejo de Seguridad Nacional, con un voto a cada uno, a los comandantes en jefe del ejército, de la armada y de la fuerza aérea, el general director de Carabineros, al contralor general de la República, y a los ppresidente del Senado, de la Corte Suprema y de la República. Designa como secretario al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Algunas conclusiones

Hemos definido como punto de partida la política del imperialismo hacia los ascensos revolucionarios que se dieron en el llamado fin del boom de la postguerra tendiente a desactivar estos procesos a través de mecanismos de desvío democráticos o a través de golpes contrarrevolucionarios abiertos. En los casos analizados de Argentina y Chile esta política implicó la derrota de las vanguardias revolucionarias a través de golpes militares y el establecimiento de dictaduras.

Como primera conclusión entonces, afirmamos que las llamadas “transiciones a la democracia” se asentaron sobre la derrota de los procesos revolucionarios de la segunda mitad de la década del 70. En el marco de la política imperialista tendiente a superar la crisis capitalista, se generaliza hacia fines de los 70 y comienzos de los 80 el llamado “imperialismo de los derechos humanos” como intento de recomponer su hegemonía apelando a una combinación de recambio de regímenes dictatoriales que perdían base social en sus países y de “guerras de baja intensidad”, tras una justificación de defensa de los derechos humanos y la democracia.

Así, las “transiciones a la democracia” en América Latina fueron parte de esta política imperialista hacia la región. En cada país se dio con diferentes tiempos y respondiendo a una particular situación de la lucha de clases y de la fortaleza o debilidad de los regímenes militares.

Estos elementos generales son comunes a los casos de Argentina y Chile. Hemos desarrollado a lo largo del trabajo las características de estos procesos en cada país. Retomemos algunos elementos para arribar a algunas conclusiones finales.

En Argentina la dictadura militar cae en el marco de una agudización de la lucha de clases combinada con la profundización de la crisis económica y de las disputas al interior del gobierno y las Fuerzas Armadas. La dictadura militar fue quedando sin sustento y el intento de sobrevida que las Fuerzas Armadas buscaron en la guerra de Malvinas, agudizó la crisis de la dictadura y atizó la movilización popular profundizando el odio de las masas contra el gobierno militar. Es decir, la dictadura militar cae fundamentalmente por efecto de la movilización de masas, por tanto, desactivar esta movilización será una tarea clave para el gobierno democrático.

Así, el gobierno de Alfonsín tiene entre sus objetivos resolver la crisis del Estado que implicaba la crisis de las Fuerzas Armadas y para hacerlo, debía canalizar la movilización popular en los carriles de las instituciones democráticas. Esta tarea se cumplió en el marco de las contradicciones planteadas por la forma en que se dio la caída de la dictadura.

Por un lado, las expectativas de las masas estaban puestas en el retorno de la democracia. Pero parte de estas expectativas estaban puestas en el castigo a los responsables del genocidio. Esto explica que en los primeros años el gobierno democrático tuviera que lidiar con la movilización en torno al problema de los derechos humanos y haya debido juzgarse a los responsables máximos de la dictadura.

Pero por otro lado, el odio a la dictadura se tradujo en la confianza en las instituciones de la democracia burguesa, como los partidos políticos. El peso de la derrota del ascenso revolucionario y la desaparición física de la vanguardia revolucionaria se hará notar aquí. La perspectiva de la revolución social había sido desdibujada en la conciencia de la clase obrera y los sectores populares. Además, la derrota en la guerra de Malvinas, si bien agudizó el odio contra la dictadura, implicó también un importante grado de desmoralización, y sobre todo reforzó en la conciencia popular el pacifismo y la visión de la imposibilidad de derrotar al imperialismo.

Ambas derrotas permitieron que la crisis revolucionaria abierta a la caída de la dictadura fuera cerrada rápidamente, con la concurrencia de todos los partidos políticos para evitar la caída revolucionaria de la dictadura y facilitaron la tarea del gobierno de transición haciendo posible la canalización de las movilizaciones contra el genocidio, las que se dieron después contra la Ley de Punto Final y más tarde contra el levantamiento militar “carapintada” y la Ley de Obediencia Debida.

Hemos planteado la definición de las transiciones democráticas como “transiciones post-contrarrevolucionarias” porque se asentaron sobre estas derrotas claves que permitieron borrar del horizonte de la clase obrera y los sectores populares la perspectiva de la revolución. Al mismo tiempo, estas derrotas hicieron posible un salto en la penetración imperialista en el país y el avance sobre las conquistas de la clase obrera y los sectores populares. Porque la clase obrera, como consecuencia de aquellas derrotas y de los efectos sobre su conciencia, dejó de ser una “clase peligrosa” por su potencial revolucionario tal cual fue en los años 70, capaz de enfrentar a la burguesía y cuestionar o frenó la aplicación de sus planes. Por el contrario, en esta etapa, como dijimos, la clase obrera, si bien ofreció muestras de combatividad (no olvidemos las luchas y los paros generales durante el gobierno alfonsinista), lo hizo depositando su confianza en las instituciones y por ende abriendo el camino para la acción de la burguesía y de las direcciones del movimiento obrero y de masas, que actuaron en su enorme mayoría en consonancia con el gobierno y la burguesía.

En el caso chileno, las diferencias en las características de la transición democrática son notorias. Sobre la base de la derrota que implicó la dictadura, tal como lo fue en la Argentina, la profundidad de esta derrota y las consecuencias para el país y para la clase obrera y los sectores populares chilenos fueron distintas. En primer lugar la dictadura militar enfrentó un cuestionamiento mucho más profundo de la dominación burguesa en Chile. La formación de los “cordones industriales” que tomaban en sus manos tareas de organización de la producción, abastecimiento, etc., transformándose en un verdadero doble poder incipiente, recibió de la burguesía una respuesta acorde con la magnitud de este cuestionamiento de su poder. La burguesía chilena se abroqueló contra el gobierno de la Unidad Popular en la medida que éste resultaba incapaz de contener el ascenso obrero revolucionario y con la acción desembozada del imperialismo norteamericano, asestaron un golpe represivo tal que abriría el camino para modificaciones estructurales de la economía chilena que no se habían dado aún en ningún otro país del cono sur.

Estas mismas transformaciones estructurales, a las que nos referimos más arriba, y el ataque a las conquistas de la clase obrera y los sectores populares, junto con la liquidación de la vanguardia revolucionaria, constituyeron derrotas enormes para el proletariado chileno y la sujeción rotunda del país al imperialismo.

La resistencia contra la dictadura militar que comenzó a expresarse diez años después del golpe no tuvo sobre el régimen el mismo efecto que la movilización que derribó a la dictadura argentina. La derrota de esta resistencia abrió el camino a la negociación con los partidos burgueses, lo que permitió que esta “transición post-contrarrevolucionaria” se diera bajo el signo de la continuidad en un grado mucho mayor que en el caso argentino. Si en este último, la dictadura militar “cae”, podemos decir que en el caso chileno la dictadura “se retira”. En el caso argentino hicieron falta seis años de gobierno radical para recomponer al Estado en crisis tras la caída de la dictadura, en el caso chileno, el gobierno de la Concertación se asentó sobre el andamiaje construido por la dictadura militar.

Sin embargo, casi al mismo tiempo que la Concertación asumía el gobierno en Chile para profundizar la política económica pinochetista, un gobierno peronista en la Argentina se aprestaba a descargar la ofensiva neoliberal sobre el país.

Es que desde un punto más general, la similitud básica entre ambos procesos se encuentra en la impronta dada por la política imperialista hacia Latinoamérica.

La política de “contrarrevolución democrática” se generaliza en los 80 con el “reaganismo-tatcherismo” que buscará descargar sobre los países periféricos la crisis reforzando los lazos de estos países con el imperialismo.

Así en Latinoamérica quedará en manos de regímenes democráticos impulsar el ataque que producirán desempleo crónico, superexplotación de la mano de obra, precarización del trabajo, pauperización de amplios sectores de las clases medias. “...la imposibilidad del capital de dar concesiones significativas para elevar el nivel de vida de las masas son las bases estructurales que tienden a minar los cimientos de los regímenes democrático-burgueses. Esto se manifiesta en una tendencia a la degradación cada vez mayor de los mismos, hasta en sus aspectos más formales. La sociología burguesa que interpreta la realidad en términos dicotómicos de "democracia o dictadura" oculta, interesadamente, no sólo el carácter de clase de ésta, sino la tendencia de estos regímenes a incorporar elementos cada vez más bonapartistas.

Más aún, cuando en las semicolonias, los regímenes de tipo democrático burgués que surgieron conllevan desde su origen un pacto de impunidad hacia los personeros de los antiguos regímenes dictatoriales”¹², como en diferentes formas sucedió en la Argentina y Chile. La reconciliación con los antiguos represores fue una política general que marca, desde el origen, el carácter degradado de estas "democracias".¹³

“La degradación cada vez mayor de las formas ‘democráticas’, va agrietando el velo de ‘la democracia burguesa como la mejor envoltura del capital’”¹⁴, debilitando contradictoriamente la herramienta privilegiada de la burguesía para imponer su política y refutando los planteos según los cuales la exigencia de “más democracia” en los términos en que venimos planteando aparece como una solución para las masas explotadas de nuestros países.

¹² Estrategia Internacional N°16.

¹³ Como gráfica Perry Anderson en su libro "Los fines de la Historia", discutiendo contra Fukuyama: "Hoy en día, la democracia cubre más territorio que nunca. Pero también resulta más débil, como si cuanto más universal se tornara, menos contenido real poseyera. Los Estados Unidos son el ejemplo paradigmático: una sociedad en la que menos del 50% vota, el 90% de los congresistas son reelegidos, y un cargo se ejerce por los millones que reporta. En Japón el dinero es aún más importante, y ni siquiera hay una alternancia nominal de los partidos. En Francia, la Asamblea ha sido reducida a un cifra. Gran Bretaña ni siquiera tiene una Constitución escrita. En las democracias recién acuñadas de Polonia y Hungría, la indiferencia electoral y el cinismo supera incluso los niveles norteamericanos: menos de un 25% de los votantes participaron en las elecciones recientes. Fukuyama no sugiere en ninguna parte que sea posible mejorar de manera significativa este triste escenario". Estas palabras escritas en el año 92, mantienen su vigencia luego de toda una década de avance de la ofensiva "neoliberal" contra las masas, como se ve incluso, luego de 9 años de crecimiento, en el proceso electoral en los mismos Estados Unidos". Citado en Estrategia Internacional N° 16

¹⁴ Idem.